

A LA MESA DEL SENADO

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente **MOCIÓN** para su debate en la **COMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES**.

Desde el pasado mes de marzo, cuando se declaró la alerta sanitaria motivada por la Covid-19 y la consecuente declaración del Estado de Alarma, las entidades locales de nuestro país han venido desarrollando un papel imprescindible y trascendental en el control de la pandemia, la protección de los ciudadanos y la reactivación económica de nuestros pueblos y ciudades.

A lo largo de estos diez meses, las entidades locales se han visto obligadas a multiplicar los fondos que tenían destinados para las ayudas de carácter social, subvenciones al tejido socioeconómico local, bonificaciones de impuestos, precios y tasas públicas, desinfecciones de edificios e infraestructuras, vías públicas y mobiliario urbano, compra de material sanitario y de equipos de protección, refuerzos en la limpieza de centros educativos, programas de reactivación de la economía local, seguridad, adaptación y cesión de instalaciones municipales a las autoridades sanitarias para atender a pacientes afectados por la Covid-19, etc.

Para ello, las entidades locales han tenido que proceder a modificaciones presupuestarias de forma reiterada que han supuesto la imposibilidad de alcanzar los objetivos de sus programas de gobierno para priorizar la protección de la salud de los ciudadanos y la recuperación económica. Lo han hecho además excediendo con creces sus obligaciones competenciales y su capacidad económica ante la falta de respuesta de la Administración General del Estado para atender a la población en una situación de crisis sanitaria, social y económica sin precedentes.

Podemos afirmar, sin ningún tipo de dudas, que sin la labor ejercida por las entidades locales los efectos de la pandemia habrían sido mucho más graves de lo que ya son. Sin su trabajo y responsabilidad muchas familias habrían quedado sin la posibilidad de conseguir suministros básicos como alimentación, medicamentos, atención a dependientes, material escolar o el pago de las facturas de la luz. Además, muchas pequeñas y medianas

empresas habrían tenido que cerrar y muchos ciudadanos, entidades y residencias de mayores no hubieran podido disponer en los primeros meses de pandemia de los más básicos elementos de protección tales como mascarillas, geles desinfectantes o guantes ante la incapacidad de la Administración General del Estado de hacer llegar al conjunto de la ciudadanía estos elementos esenciales para la protección de su salud y la de sus familias, algo del todo inaudito en una sociedad moderna y avanzada como la española. En definitiva, han ayudado al sostenimiento del empleo público pese a las bajadas de ingresos.

Pese a ese esfuerzo las entidades locales no han recibido del Gobierno en estos últimos diez meses ningún tipo de ayuda ni financiación extraordinaria para soportar estos gastos, habiéndolos afrontado con sus propios recursos y, al menos hasta la fecha, sin poder recurrir al 100% de sus propios ahorros para ayudar a sus vecinos en una situación de calamidad económica y social.

El Gobierno de España tan solo ha permitido a las entidades locales destinar una pequeña parte de sus propios superávits y remanentes para afrontar los costes derivados de la pandemia, algo totalmente insuficiente y que deja al margen a aquellas entidades locales que no disponían de dichos ahorros. Del mismo modo tenemos que lamentar la absoluta ineficacia, falta de transparencia y engaño reiterado al municipalismo español del Gobierno de España, al anunciar desde hace más de cinco meses en varias ocasiones la inminente aprobación normativa para poder utilizar el 100% del superávit y los remanentes de las Entidades Locales sin que hasta el momento se haya producido.

El Gobierno de España, además de no escuchar y atender las propuestas de la Federación Española de Municipios y Provincias y del engaño al que está sometiendo a las entidades locales sobre la inminente disponibilidad de sus ahorros, ha decidido abandonar a las entidades locales a su suerte no destinando hasta el momento ni un solo euro de financiación extraordinaria para aquellas administraciones que están en el día a día de la gestión de la pandemia y ayudando a los ciudadanos.

El último ataque y engaño al municipalismo por parte del Gobierno de España se contempla en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en el que tan solo se contempla una participación de 1.489 millones de euros de los Fondos de Recuperación de la Unión Europea para todas las entidades locales de España, suponiendo un 1% del total de los Fondos a recibir por nuestro país y demostrando una vez más el nulo apoyo y respeto institucional que este Gobierno ofrece al municipalismo.

La Federación Española de Municipios y Provincias ha vuelto a hablar de forma clara y justa instando al Gobierno a destinar fondos de reconstrucción a las

entidades locales en una cuantía similar a la participación de la Administración Local en el gasto público del Estado, es decir, en torno a un 14% del total de los fondos europeos a percibir por España.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en virtud del acuerdo alcanzado en la FEMP, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presenta a la aprobación de la Comisión de Entidades Locales la siguiente

MOCIÓN

La Comisión de Entidades Locales insta al Gobierno a:

1. Que la participación de las Entidades Locales en el Fondo de Recuperación de la Unión Europea sea proporcional a la participación de la Administración Local en el Gasto Público.
2. Que en enero de 2021 el Gobierno fije el reparto entre las Entidades Locales de los Fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de acuerdo con las prioridades que establezca la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de protección social, fomento del empleo, cultura y deporte, medioambiente y bienestar comunitario, urbanismo y vivienda, seguridad y movilidad ciudadana, sanidad y educación, y otras cuestiones de impacto local.

Palacio del Senado, 9 de diciembre de 2020

Javier MAROTO ARANZABAL

PORTAVOZ

Coste económico:

Estará en función de las medidas que el Gobierno esté dispuesto a ejecutar de la transferencia de dinero que recibirá de los organismos europeos.